

**ABSOLUCIÓN POR INSUFICIENCIA PROBATORIA**

**Sumilla.** Se verifica que existe un solo testigo directo de los hechos quien sindicó al recurrente en las primeras etapas del proceso y en juicio oral se retractó. Pero aun cuando hubiera persistido en su dicho inculpativo, no se aparejó prueba alguna que periféricamente corrobore que fue el recurrente quien dio muerte al agraviado.

Por insuficiencia de pruebas, no es posible ratificar la condena, sino más bien corresponde la absolución del recurrente al no haberse enervado la presunción de inocencia que lo acompaña por mandato constitucional.

Al haber transcurrido ya casi 20 años desde que se suscitaron los hechos, tampoco existe mayor posibilidad de un cabal esclarecimiento del crimen y, por ende, de la responsabilidad penal del concernido.

Lima, veinticinco de enero de dos mil veinticuatro

**VISTO:** el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de **REINALDO CAMPOS JULÓN** contra la sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintidós (fojas 556-595), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Cajamarca, en adición de funciones de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Mediante dicha sentencia se le condenó como autor del delito de homicidio calificado, en perjuicio de Saúl Silva Vásquez y, en consecuencia, se le impuso la pena de dieciséis años, nueve meses y veintitrés días de privación de libertad, así como el pago de S/ 10 000,00 por concepto de reparación civil, a favor de los herederos legales del agraviado; con lo demás que contiene.

Con la opinión expuesta por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo **Guerrero López**.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO**

El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante, C de PP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano<sup>1</sup>. Está sometido a motivos específicos y no

---

<sup>1</sup> Cfr. MIXÁN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. *Derecho procesal penal*. Lima: Grijley, 2014, p. 892.

tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331) efectos suspensivos, de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del C de PP.

## SEGUNDO. IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

**2.1.** En la acusación fiscal (fojas 195-198), se le atribuyeron los siguientes hechos al recurrente:

El **25 de mayo de 2004**, el agraviado Saúl Silva Vásquez en compañía de Rodolfo Díaz Huamán se encontraba por el sitio denominado Amarobas Totoras, conocido también como Laguna Cortada, pues asistirían a una reunión donde estarían las Rondas Campesinas de la provincia de Celendín, Hualgayoc-Bambamarca y La Encañada, y cuyo propósito era dar a conocer que en los límites de Quengo Río existían problemas de delimitación, cuando escucharon disparos de bala, así que corrieron a fin de salvaguardarse. En esos instantes, aparecieron **Reinaldo Campos Julón**, Santos Campos Julón y Raúl Campos Julón quienes rodearon al agraviado y a Rodolfo Díaz Huamán, y sin mediar motivo alguno, Reinaldo Campos Julón disparó al agraviado en la cabeza con lo cual ocasionó su muerte instantáneamente.

**2.2.** Los hechos fueron subsumidos en el delito de homicidio calificado previsto en el inciso 1 (ferocidad) del artículo 108 del Código Penal (en adelante, CP) modificado por la Ley 27472, publicada el 5 de junio de 2001<sup>2</sup>.

**2.3.** Realizado el juicio oral, el 20 de diciembre de 2022, se emitió la sentencia que condenó a Reinaldo Campos Julón, en consecuencia, se le impuso la pena de 16 años, 9 meses y 23 días de privación de libertad, así como el pago de S/ 10 000,00 por concepto de reparación civil, a favor de los herederos legales del agraviado.

**2.4.** Frente a esta decisión, el sentenciado interpuso recurso de nulidad dentro del plazo legal de diez días, cuyos agravios se detallan a continuación.

---

<sup>2</sup> Cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 108

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:

1. Por ferocidad, por lucro o por placer.
2. Para facilitar u ocultar otro delito.
3. Con gran crueldad o alevosía.
4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas”.

### **TERCERO. FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE**

La defensa en su recurso de nulidad (a fojas 609-620), expresó esencialmente los siguientes argumentos:

**3.1.** La sentencia se basó en actos de investigación y no en pruebas, por lo que estas deben ser excluidas del bagaje probatorio de la decisión por contravenir los principios constitucionales de producción y valoración de prueba del artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal y del artículo 393 del mismo cuerpo legal (aplicables para este caso, según la defensa) y en tal sentido, corresponde la absolución de su patrocinado.

**3.2.** Se aplicó incorrectamente el precedente vinculante del Recurso de Nulidad 3044-2004/Lima, pues este establece que es posible valorar aquellas declaraciones obtenidas a nivel preliminar siempre que no solo hubiera existido presencia del fiscal provincial sino también de la defensa, en consonancia con lo cual en doctrina se ha opinado que, de lo contrario, se estaría obligando a los jueces a valorar indebidamente actos de investigación y no una verdadera prueba penal.

**3.3.** La condena se sustentó solo en actos de investigación de tipo documental, y ninguna fue sometida a inmediación, ni contradicción, entre ellas, las declaraciones previas de los testigos Díaz Huamán, Orrillo Huamán, el PNP Silva Saucedo, acta de constatación y verificación, croquis del lugar de los hechos, y acta de inspección judicial. Solo la declaración testimonial de Rodolfo Díaz Huamán fue recibida con las garantías necesarias y él señaló que atribuyó el delito a su patrocinado por la amenaza de terceras personas y dado el temor de que lo acusen a él. Pese a su dicho, la Sala Penal Superior no lo analizó conforme con el Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116.

**3.4.** Se dispuso de oficio la actuación de la declaración de Victoriano Garay Ramos, pues para el Colegiado Superior se requería para resolver la duda que existía sobre la vinculación de su patrocinado con los hechos; no obstante, luego determinó que su declaración no produjo ningún aporte al proceso, así que ante la duda se debe dictar la absolución.

### **CUARTO. DICTAMEN DEL FISCAL SUPREMO EN LO PENAL**

En el Dictamen 241-2023-MP-FN-1ºFSUPR.R (fojas 72-77 del cuadernillo supremo forma en esta Suprema Corte), el fiscal supremo en lo penal opinó que se declare **no haber**

**nulidad** en la sentencia recurrida. En su criterio, las pruebas testimoniales y documentales fueron correctamente actuadas en el juicio oral, todas ellas revestidas de las garantías legales correspondientes y las mismas que valoradas en conjunto son suficientes para enervar la presunción de inocencia del recurrente Reinaldo Campos Julón.

#### **QUINTO. ÁMBITO DEL RECURSO DE NULIDAD**

Este Supremo Tribunal se limitará a resolver lo expresado en los agravios invocados en los recursos de nulidad, de acuerdo con lo prescrito en el inciso 1 del artículo 300 del C de PP (principio conocido como *tantum devolutum quantum appellatum*). Se tiene en cuenta que el derecho a la impugnación constituye el ejercicio de un derecho fundamental, y la competencia del órgano de revisión está delimitada objetiva y subjetivamente precisamente por los cuestionamientos expresados en los medios impugnatorios (agravios), salvo los supuestos excepcionales de nulidades absolutas.

#### **SEXTO. CONTROL DE LA VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL**

El tipo penal imputado tiene una pena máxima de 35 años, por lo que en aplicación del artículo 83 del CP, el plazo de prescripción extraordinaria es de 30 años. Como los hechos se suscitaron el 25 de mayo de 2004, la acción penal aún sigue vigente.

Adicionalmente, cabe anotar que no concurrieron circunstancias que hubieran permitido reducir el plazo de prescripción, tal como la responsabilidad restringida, pues el recurrente contaba con 25 años al momento en que ocurrieron los hechos.

#### **SÉPTIMO. SUSTENTO NORMATIVO**

**7.1.** En forma previa a analizar la cuestión de fondo y que es materia de impugnación (si la sentencia condenatoria se encuentra debidamente motivada y, en consecuencia, conforme a ley), se debe considerar que la **prueba** es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción

del juez acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso<sup>3</sup>.

En ese sentido, como expresa Talavera<sup>4</sup> citando a Jordi Ferrer:

Una concepción racionalista acerca de la prueba, consiste en: **a)** la averiguación de la verdad como objetivo institucional de la actividad probatoria; **b)** la aceptación del concepto de verdad como correspondencia; **c)** el recurso a metodologías y análisis propios de la epistemología general para la valoración de la prueba, sin desconocer la concurrencia de algunas normas jurídicas como criterios racionales para la valoración dentro de un sistema de libre apreciación.

**7.2.** La presunción de inocencia, como un principio del proceso penal, alude a que por imperio constitucional nadie será declarado responsable de un delito, si no existe una sentencia judicial que lo declare de esa manera, para esto se debe desarrollar un proceso judicial y, dentro de este, un juicio; en ello reside la construcción judicial de la culpabilidad. Esto significa que solo la sentencia tiene la virtud de declarar la responsabilidad penal, lo cual implica la adquisición de un grado de certeza mediante **suficiencia probatoria**, descartándose cognitivamente cualquier duda sobre la situación jurídica del procesado.

#### **OCTAVO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO**

**8.1.** Con base en el sustento jurídico expuesto y los agravios de la defensa, le corresponde a este Tribunal determinar si la condena impuesta a Reinaldo Campos Julón por el delito de homicidio calificado fue correcta o no.

Al respecto, se aprecia que para la Sala Penal Superior la principal prueba de cargo fue la sindicación del **testigo Rodolfo Díaz Huamán**, quien declaró a lo largo de todo el proceso, y no fue cuestionado por la defensa en cuanto a su legalidad, pero sí sobre su suficiencia para enervar la presunción de inocencia de Reinaldo Campos Julón. Así, pues, de la revisión de los actuados se verifica que el citado testigo declaró de la siguiente forma:

**i)** A **nivel preliminar**, rindió su manifestación de 31 de mayo de 2004, con presencia del fiscal provincial (fojas 16-18) y señaló que el día de los hechos el agraviado se apersonó a su domicilio con la finalidad de continuar con su ruta a la Laguna Cortada

<sup>3</sup> GIMENO SENDRA. *Fundamentos del derecho procesal penal*. Madrid: Civitas, 1981, p. 214.

<sup>4</sup> TALAVERA ELGUERA. *La prueba en el nuevo proceso penal*. Lima: Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, 2009, p. 13.

donde asistiría a una reunión sobre los límites de la provincia de Bambamarca y la de Celendín, y él iría en su calidad de teniente gobernador de Alto Conocorgue. De tal forma, el testigo lo acompañó a la referida reunión y ambos salieron de la casa aproximadamente a las 10:00 horas. Vieron a varias personas de la familia Orrillos y de repente se suscitó una balacera. El agraviado le dijo al testigo que se sentasen a mirar desde una fila cuando una bala les cayó cerca y se asustaron. Intentaron retirarse cuando tres sujetos se les acercaron, eran los hermanos Reinaldo, Raúl y Santos Campos Julón. Reinaldo Campos Julón encañonó al agraviado y lo mató, mientras que el testigo rogó por su vida, y luego de decirle palabras soeces lo dejaron ir. Después de esto, el testigo buscó al papá del agraviado y le contó lo sucedido.

ii) En la **instrucción**, el 21 de julio de 2005 ante el juez instructor (fojas 162-163) ratificó que el día de los hechos acompañaba al agraviado a la reunión sobre el deslinde entre Bambamarca y Celendín. Cuando llegaron a la Laguna Cortada se sentaron un rato los dos solos y escucharon que desde la casa de Victoriano Garay Ramos había como una especie de cuetes, y por el otro lado apareció parte de la familia de los Orrillo, así que el agraviado lo llevó a mirar desde un lado mientras las balas pasaban por encima de ellos. Intentaron correr, cuando tres sujetos vinieron hacia ellos con armas, les preguntaron qué hacían ahí y ellos le respondieron que habían ido por la reunión, ante esto les apuntaron con las armas y Reinaldo Campos Julón disparó al agraviado en la cabeza.

iii) En la sesión de **juicio oral** del 12 de agosto de 2022 (foja 430), reiteró que el día de los hechos estaba con el agraviado, lo referente a la balacera y hasta el punto en que de repente aparecieron tres sujetos; no obstante, en dicha instancia aseveró que estos se encontraban encapuchados y no los pudo reconocer. Al consultarle por su cambio de versión, el testigo explicó que en su momento había una multitud de gente que le decía que el autor de los hechos había sido Reinaldo Campos Julón y él no sabía qué hacer, así que para salvar su vida dijo que fue él, aunque no lo conocía, básicamente por presión de la familia Orrillo y también porque la familia del agraviado le decía que si no hablaba entonces era él quien lo había matado.

**8.2.** Ahora bien, para este Supremo Tribunal la sindicación del testigo Rodolfo Díaz Huamán debió analizarse conforme con las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116<sup>5</sup> pues de cumplirlas tendría la capacidad de enervar la presunción de inocencia del acusado. Estas son:

---

<sup>5</sup> De 30 de septiembre de 2005. Asunto: requisitos de la sindicación del coacusado, testigo o agraviado.

i) Incredibilidad subjetiva, referido a la inexistencia de ánimos espurios entre el agraviado y el acusado de forma que brinde una sindicación parcializada en su contra. ii) Verosimilitud, la cual consiste en la coherencia y solidez de la sindicación del agraviado, y la existencia de pruebas que la corroboren periféricamente. iii) Persistencia en la incriminación.

**8.3.** En cuanto a la primera garantía, la Sala Penal Superior (sin seguir necesariamente los lineamientos del citado acuerdo plenario) declaró probado que entre el testigo y el acusado no existía ningún ánimo espurio, es más, aludió a que la defensa ni siquiera cuestionó este aspecto. Por lo que esta garantía fue superada.

Con relación a la segunda garantía, referida a la **verosimilitud**, la defensa centró sus agravios con especial énfasis en este rubro pues en su consideración **las pruebas de cargo** valoradas por la Sala Penal Superior no solo no contemplaban las garantías legales exigidas, sino que además eran insuficientes. En razón de lo anotado, este Supremo Tribunal analizará cada una de dichas pruebas a continuación y establecerá si estas realmente vinculan periféricamente a Reinaldo Campos Julón con los hechos o no:

i) Para la Sala Penal Superior, con la declaración preliminar de Faustino Orrillo Huamán (foja 10), la invitación de encuentro de rondas campesinas y deslinde de límites de provincias, el acta de constatación de inmueble de Victoriano Garay Ramos (foja 27), el acta de diligencia de inspección judicial (fojas 90-93) y el croquis (foja 29)<sup>6</sup> se acreditó que el día de los hechos el agraviado estuvo entre el lugar denominado Amaro y Laguna Cortada, ya que en dicho lugar se debatiría la delimitación de las zonas de Hualgayoc-Bambamarca, Celendín y la Encañada.

Además, para la citada Sala, también con las mismas pruebas se probó que tal día el agraviado y Rodolfo Díaz Huamán, luego de escuchar una balacera, se refugiaron en la ladera del cerro en el que se encontraban, hasta que el acusado Reinaldo Campos Julón los interceptó y premunido de un arma de

---

<sup>6</sup> Todas estas oralizadas en la sesión de juicio oral.

fuego le dio muerte solo al agraviado, dejando vivo al único testigo presencial de los hechos, esto es, a Rodolfo Díaz Huamán.

Este Supremo Tribunal al contrastar el contenido de cada una de estas pruebas con la conclusión de la Sala Penal Superior, aprecia que efectivamente se ha acreditado que el agraviado estuvo en el lugar y hora en que ocurrió la balacera; no obstante, este aspecto y la materialidad del delito (la muerte del agraviado por el disparo de un arma de fuego a corta distancia) no estaba en cuestionamiento durante el juicio oral y objetivamente ninguna de tales pruebas vinculan al acusado como el responsable de los hechos, ni siquiera lo ubica en el mismo lugar y hora que el agraviado, directa o indiciariamente. Por lo que no compartimos la valoración efectuada por la Sala Penal Superior en este extremo.

ii) Asimismo, en la decisión recurrida la declaración de **Sacarías Silva Saucedo** (padre del agraviado) con presencia del fiscal (fojas 11-12 y 100-101) oralizada en el plenario sería un elemento probatorio que acreditó que el agraviado fue hallado muerto en la Laguna Cortada luego de concurrir a la reunión realizada en dicho lugar, pues, según lo que Rodolfo Díaz Huamán le dijo, el autor de la muerte de su hijo fue Reinaldo Campos Julón.

En conexión con dicha prueba, la citada Sala también consideró la declaración preliminar de **Gerardo Orrillo Chávez** con presencia del fiscal (fojas 13-15) quien igualmente habría visto al agraviado en la reunión mencionada momentos antes de ser victimado, y cuya declaración fue valorada para reforzar que el agraviado estuvo en el lugar de los hechos.

En cuanto a esta conclusión, este Tribunal advierte que el contenido probatorio de estas declaraciones redundante en los aspectos que ya se había acreditado en la decisión recurrida, esto es, que el agraviado estuvo en la Laguna Cortada porque asistiría a una reunión en compañía de Rodolfo Díaz Huamán para luego ser hallado muerto.

Sumado a ello, si bien Sacarías Silva Saucedo refirió que Rodolfo Díaz Huamán (padre del agraviado) le dio aviso que el autor de los hechos fue Reinaldo Campos Julón, se advierte que, al margen del hecho objetivo de ser su padre



(can la evidente carga subjetiva implícita condicionada por el propio dolor como ser humano), en esencia se trataría de un testigo de oídas, cuya declaración para tener validez primeramente requeriría que el testigo directo confirme su dicho, o que surjan elementos objetivos periféricos corroborantes, nada de lo cual en este caso surgió, pues Rodolfo Díaz Huamán se retractó y más bien aseveró que fue presionado por toda la familia del agraviado para inculpar a Reinaldo Campos Julón. De forma que estas declaraciones no son contundentes.

A ello, conviene agregar que Gerardo Orrillo Chávez también refirió haber visto que Reinaldo Campos Julón fue quien disparó al agraviado; sin embargo, la Sala Penal Superior estimó que no podía valorar su declaración como una prueba de cargo, ya que expresamente manifestó ánimos espurios en contra del acusado por el tema del deslinde de las tierras, rencillas familiares que incluso se mantenían hasta la actualidad, y además porque su declaración en sí misma resultaba algo incoherente, ya que refirió haber presenciado los hechos a 300 o 400 metros de distancia, es decir, un espacio físico considerablemente largo como para vislumbrar con claridad al acusado, aun teniendo buena vista. Esta conclusión de la citada Sala es correcta en los mismos términos expuestos.

Cabe acotar, además, que este testigo no declaró en la instrucción ni en el juicio oral pero tampoco brinda una información clara y directa sobre el crimen.

iii) Por su parte, la Sala Penal Superior señaló que con las pruebas analizadas se acreditó la ferocidad con la cual se cometió el homicidio, ya que de lo actuado no se apreciaba móvil aparente que permita entender la razón que llevó al acusado a disparar al agraviado directamente a la cabeza, a quemarropa, tal como lo explicó el perito médico legal en juicio oral.

En este punto, nuevamente esta Suprema Corte verifica que el razonamiento de la Sala Penal Superior se circunscribe a aspectos no relacionados con la vinculación de Reinaldo Campos Julón a los hechos. Aun cuando pueda haber existido ferocidad en la comisión delictiva, esto no arriba a la condena del recurrente por cuanto objetivamente no existe prueba suficiente de su protagonismo o intervención.

**8.4.** Por lo expuesto, este Supremo Tribunal concluye que las objeciones sobre la falta de pruebas planteadas por la defensa son reflejo de las limitaciones en la obtención, la proposición, la actuación y la valoración probatoria, por lo que es obvio que existe insuficiencia probatoria para ratificar la condena de Reinaldo Campos Julón. Por el contrario, se tiene un solo testigo directo de los hechos quien se retractó en juicio oral de la sindicación formulada en su contra, y aun cuando hubiera persistido en su dicho, no se verifica prueba alguna que periféricamente pudiera corroborarla.

A lo largo de la presente ejecutoria, solo se aprecian actuaciones que se orientan a determinar la muerte del agraviado por un disparo efectuado a corta distancia y directamente a la cabeza, aspecto que no ha sido cuestionado, pues es indiscutible que objetivamente el hecho ocurrió de dicha forma. Más bien, lo que no existe son pruebas que vinculen a Reinaldo Campos Julón, ni se avizora (han pasado cerca de 20 años desde que se suscitaron los hechos) posibilidad alguna de un cabal esclarecimiento, pues incluso la prueba de oficio actuada por la Sala Penal Superior no cumplió con dicho fin<sup>7</sup>.

**8.5.** En conclusión, corresponde revocar la condena al no haberse enervado la presunción de inocencia que constitucionalmente acompaña al recurrente y disponer su inmediata libertad (la que se hará efectiva siempre que no pese en su contra orden de detención emanado de autoridad competente), así como el archivamiento definitivo de la causa donde corresponda.

### DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República acordaron:

**I.** Declarar **HABER NULIDAD** en la sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintidós emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Cajamarca, en adición de funciones de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que condenó a **REINALDO CAMPOS JULÓN** como autor del delito de homicidio, en perjuicio de Saúl Silva Vásquez y, en

---

<sup>7</sup> Se trató de la declaración del testigo Victoriano Garay Ramos quien en juicio oral se limitó a señalar que no recordaba los hechos (fojas 525-528).

consecuencia, se le impuso la pena de dieciséis años, nueve meses y veintitrés días de privación de libertad, así como el pago de S/ 10 000,00 por concepto de reparación civil, a favor de los herederos legales del agraviado; con lo demás que contiene. **REFORMÁNDOLA** lo absolvieron de la acusación fiscal formulada en su contra por el mismo delito y agraviado; en consecuencia, **DISPUSIERON** el archivo definitivo de la causa donde corresponda y la anulación de los antecedentes que se hubieran generado con este motivo.

**II. ORDENAR la inmediata libertad** de **REINALDO CAMPOS JULÓN**, la que se hará efectiva siempre y cuando no subsistan en su contra orden o mandato de detención emanado por autoridad competente; en consecuencia, **SE OFICIE** vía fax u otro medio técnico igualmente eficaz, a fin de concretar su libertad, a la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Cajamarca, en adición de funciones de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

**III. DISPONER** se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la sala superior de origen y se archive el cuadernillo.

**S. S.**

PRADO SALDARRIAGA

BROUSSET SALAS

CASTAÑEDA OTSU

**GUERRERO LÓPEZ**

ÁLVAREZ TRUJILLO

ISGL/rbb